

Rodríguez, Montes, Jesús, “Mantienen comuneros de Temalacatzingo su resistencia a incorporarse al Procede”, *El sur de Acapulco*, Guerrero, 31 de mayo, 2005.

Dirección electrónica:

<http://www.suracapulco.com.mx/anterior/2005/mayo/30/guerrero.htm>

Comuneros de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, mantienen su resistencia a incorporarse al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) ante la insistencia de la Procuraduría Agraria (PA), a la cual acusan de que con ello pretende dividir al pueblo

El rechazo de esta comunidad campesina y artesana hacia el Procede, la fincan en que el cambio del régimen comunal de la propiedad de la tierra a uno donde cada comunero sea “el propietario legal”, daría paso a la privatización de los terrenos y con ello a la entrada de las empresas privadas en este pueblo de más de 5 mil habitantes y que, confían, muy pronto se constituirá en cabecera del nuevo municipio que pretende ser desde hace más de tres años.

Son cerca de 2 mil comuneros en Temalacatzingo de los cuales tan sólo unos “cien o ciento cincuenta” son los que quieren incorporarse al Procede a propuesta de la PA, que en los meses de diciembre del año pasado, enero y mayo de éste, ha recibido la respuesta negativa de la mayoría de los comuneros para ingresar al programa.

Durante una visita de El Sur a Temalacatzingo, ubicado a unos 40 minutos de la cabecera municipal, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Juan Villa Hernández, dijo que primero la Procuraduría Agraria estuvo “insistiendo en que nosotros no somos representantes legales porque no estamos reconocidos”, pero a últimas fechas y dado que desde la Secretaría General de Gobierno del estado han explicado a los comuneros que el ingreso “es opcional”, la autoridad federal “ha cambiado el discurso”.

“En las últimas fechas lo ha negado: No es cierto, yo nunca les he dicho”, dijo el residente de la PA en esta región, Miguel Ángel Bello Rivera, al presidente del comisariado de Temalacatzingo.

Villa Hernández consideró que con estas acciones la PA pretende dividir al pueblo. “Creo que la Procuraduría está buscando un enfrentamiento y lo hacemos responsable,

inmediatamente al titular de la Procuraduría (en La Montaña), Miguel Ángel Bello Rivera. Ya se lo dijimos”.

Coinciden en la opinión los campesinos Exmerardo Zeferino Villa y Lucas Jerónimo de la Luz, quienes fueron entrevistados en las instalaciones de la Comisaría de Bienes Comunales, –en donde cuelgan tres grandes pinturas de Emiliano Zapata– además indicaron que en el lío se han involucrado los partidos políticos.

Lucas Jerónimo recordó que “antes de esto del Procede no había problemas. Pero ahora sí se están viendo. Los que lo buscan son un grupo de priístas que quieren poner las tierras en manos del gobierno, un grupo que nos está traicionando. Nosotros lo que queremos es que se nos respete nuestra decisión como indígenas que somos, que nos respeten”.

Es un gancho

En esta comunidad nahua donde en 1996 hubo una “intensa” presencia militar tras la aparición de un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), los campesinos actualmente se niegan a cambiar el régimen comunal de la propiedad de la tierra, a pesar de la insistencia del gobierno federal que utiliza al Procede como “un gancho” para despojarlos de ellas.

Isaac Menor Hernández, comunero y maestro de educación primaria, explicó que están satisfechos con el régimen comunal porque ello “significa que la tierra es de todos y tenemos la oportunidad de trabajar en ella como mejor nos conviene”.

Sin embargo, a pesar de que cuentan con actas de posesión por un decreto presidencial desde 1954, reafirmó que la PA insiste en anexarlos al Procede, a pesar de su resistencia, con lo cual, dijo “no nos está respetando”.

Consideró que busca utilizar al programa como “un gancho” para después llegar a la privatización de las tierras. “Sabemos que el Procede no es tanto para beneficiar al campo, sino que lo utiliza el gobierno como un gancho para que los pueblos en cierto momento tengan que aceptar la privatización y con esto la desaparición de los bienes comunales ejidales del país”.

Agregó que el gobierno va hacia la privatización de los bienes nacionales y que las tierras de uso común pasarían a ser propiedad de la nación y después harían lo que quisieran.

Menor Hernández consideró que el programa que quiere ser “introducido por el gobierno con engaños” sólo trae “expectativas que no favorecen a la comunidad”, por eso manifestó que “la tierra debe ser para quien la trabaja”

Rechazó a esta iniciativa del gobierno federal debido a que “estamos en contra de las sociedades que pretenden traernos industrias, empresas que lejos de beneficiarnos nos van a hacer más daño, a eso quiere llegar el gobierno, y nosotros no queremos eso para nuestros hijos”.